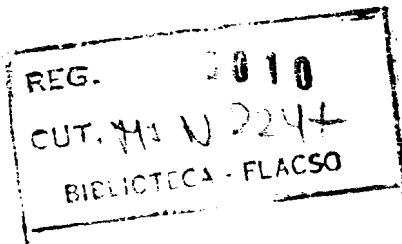


FLACSO - Biblioteca

# **La República Dominicana y Haití frente al futuro**

SANTO DOMINGO  
REPUBLICA DOMINICANA  
1998

320  
S<sup>o</sup> 34 re



1998  
Santo Domingo,  
República Dominicana

*La República Dominicana y Haití frente al futuro*

Rubén Silié  
Orlando Inoa  
Arnold Antonin  
Editores

Ediciones:  
FLACSO-Programa República Dominicana

Diagramación: Mediabyte, S. A.  
Impresión: Impresora Yan

# INDICE

Presentación .....	i
Aspectos socio-históricos sobre la inmigración haitiana a la República Dominicana <i>Rubén Silié</i> .....	1
La República de Haití y la República Dominicana <i>Georges Brunet</i> <i>Kesner Pharel</i> Con la colaboración de: <i>Francisco Guerrero Prats</i> .....	33
Coordenadas coyunturales bajo el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana <i>Roberto Cassá</i> .....	73
Haití: Modernización política y democratización <i>Claude Moïse</i> .....	95
De la solidaridad a la cooperación institucionalizada <i>Kathy Magonès</i> .....	135
Medio ambiente en Haití y la República Dominicana <i>Rafael Emilio Yunén</i> .....	153
Los desafíos ecológicos en Haití hacia el año 2000 <i>Roberson Jonas Léger</i> .....	181

**HAITI:  
MODERNIZACION POLITICA Y  
DEMOCRATIZACION**

Claude Moise

---

## **HAITI: MODERNIZACION POLITICA Y DEMOCRATIZACION**

### **Haití y la República Dominicana: una geografía limitante y dos historias paralelas frecuentemente entremezcladas.**

Ya se ha dicho antes que el destino de los 15 millones de habitantes de esta isla, la más poblada del Caribe, está ligado, en un plazo más o menos largo, independientemente de la voluntad y de las suputaciones de unos y de otros. O hacemos caso omiso de estos datos básicos y nos encaminamos hacia un fracaso lamentable y trágico, o los actores sociales, económicos y políticos de ambos lados de la frontera están muy convencidos de ello y trabajan para elaborar una política rigurosa y prácticas claramente asumidas de cooperación y de intercambios en el interés bien comprendido de ambos pueblos. En esta perspectiva, una política lúcida, enmarcada en la visión de un futuro compartido, una política consciente del estado del mundo actual, preocupada por el desarrollo nacional tiene, necesariamente, como prerequisites la modernización y la democratización de la sociedad y del Estado. Entre ambos países, las experiencias democráticas, los niveles de institucionalización, de modernización y de desarrollo económico son desiguales. Debemos dedicarnos a la tarea de confrontar nuestras experiencias históricas respecto a la evolución crítica de dichos elementos a fin de sacar de ellas el mejor provecho posible. En la situación actual de Haití, resulta imposible plantear la cuestión de la democratización y de la modernización del Estado sin tomar en consideración la crisis generalizada en la que se debate el país desde hace más de un decenio.

#### **1. Planteamiento del problema: de ayer a hoy**

La salida de Duvalier en 1986 constituye sin lugar a duda un viraje decisivo en la lucha por la democracia en Haití. Inicia al mismo tiempo una fase crítica post-dictatorial durante la cual se plantean a la vez las cuestiones de la reconstrucción del Estado, de

los desafíos del poder, de la redefinición de las relaciones entre las fuerzas sociales y políticas, internas y externas, aunadas a un amplio movimiento popular con múltiples reivindicaciones, entre las cuales la aspiración a la calidad de ciudadano no es la menos importante. El régimen estaba tan deteriorado que la salida de Duvalier conllevó la desorganización de todas las instituciones tradicionales (el Ejército, la Iglesia, etc.); el despertar popular fue tal, las contradicciones fueron tan agudas, los intereses tan entremezclados y el contexto internacional tan diferente que ninguna solución de remiendo a la usanza tradicional pudo imponerse.

En esta situación de crisis que perdura pese a los avances hacia la normalización, se considera fácilmente a la democracia como el objetivo a alcanzar. Pero la democracia abarca un conjunto amplísimo de elementos y cubre un campo de acción extenso. ¿Se trata sencillamente del régimen político en el cual la autoridad se ejerce en nombre del pueblo que la otorga por medio del sufragio universal expresado sin ninguna coerción? ¿Tiene que ver ante todo con la promoción de un régimen de justicia en beneficio de las masas históricamente marginadas, con el acceso del país a un Estado de derecho, de los oprimidos a la calidad de ciudadanos? ¿Debe considerarse únicamente, de manera prioritaria, la garantía del respeto a los derechos fundamentales de la persona humana, los cuales son también muy extensibles? De todo esto y de otros muchos factores más es que procede la cuestión haitiana.

Evidentemente, existe una relación estrecha entre el desarrollo de la crisis cuyas dimensiones económicas y sociales son tan considerables unas como otras y el proyecto democrático. La crisis, es el trastorno total del régimen, pero también es la pérdida de los hitos tradicionales, la lucha entre lo antiguo que no quiere morir y lo nuevo que se está buscando, que no se reconoce todavía, que trata afanosamente de definirse. Lo antiguo, no es solamente la dictadura "*macoute*" que fue derrocada y cuyos residuos siguen envenenando el ambiente, lo antiguo es también una parte de la tradición y de la cultura, identificable en los actores así como en los lugares sociales y ámbitos de la vida, incompatible con los requisitos del cambio verdadero y de la democracia efectiva. (Jerarquía del desprecio social, sub-racismo, oscurantismo, intole-

rancia, violencia, desconfianza, sectarismo, cimarronaje, mentalidad trágica, tradición de la improvisación, etc.)

La historia reciente revela hasta qué punto la lucha es compleja y profunda. Comenzada mucho antes de 1986, la lucha democrática se incrementó con la huida de Duvalier bajo el empuje del vigoroso movimiento de protesta que se extendió por todo el país; prosiguió a través de numerosos sobresaltos, con pausas, momentos cumbres, avances y retrocesos, hasta que la intervención decisiva de las potencias tutelares y de la comunidad internacional corrija la deriva, ayudando primero a poner un punto final a una fase de normalización mediante las elecciones generales de 1991, luego a restablecer, en 1994, el orden constitucional destruido por el golpe de Estado de 1991. Todavía hoy el país no consigue salir del atolladero, encontrar una vía de salida garantizada por todos los actores y por todas las fuerzas implicadas en la crisis. Con excepción de la revolución anticolonial y antiesclavista (1791-1804), ninguno de los grandes períodos de disturbio de la historia nacional, asimilados a crisis de transición, ha durado tanto tiempo.

La crisis general y los problemas que genera son múltiples y complejos:

- La instauración de un nuevo régimen político, acorde con el nuevo modelo constitucional, la organización de elecciones limpias, reformas administrativas, reorganización del sistema judicial, puesta en servicio de nuevas fuerzas de seguridad para dar una respuesta a la necesidad de seguridad de la población, formadas en el respeto de los derechos democráticos de los ciudadanos.
- El funcionamiento de los servicios básicos, tales como el agua, la electricidad, el saneamiento de las grandes ciudades, la protección urgente del medio ambiente.
- La lucha contra la carestía de la vida, la inseguridad, la corrupción, el contrabando, el tráfico de drogas.
- La recuperación de una economía ya fuertemente afectada por la inestabilidad y la inseguridad crónicas, y luego literalmente damnificada por el embargo.

Y todo ello en una sociedad fragmentada, en un país desorganizado, totalmente dependiente, reducido a vivir de la ayuda internacional, que vive con el sentimiento de una maledicción recurrente y de la incapacidad de sus dirigentes a enfrentar los problemas de la vida cotidiana. Cuanto más transcurre el tiempo, tanto más se agravan los problemas. En este contexto, las luchas políticas toman una dimensión dramática que desasosiega a las potencias dominantes, y en especial a los Estados Unidos, y a los países vecinos, y en especial a la República Dominicana, preocupados por la estabilidad y la seguridad de la región y por los efectos de la prolongada crisis sobre las migraciones. Salir de la miseria bajo todas sus formas (institucional, económica, social, política, cultural, etc.), alcanzar un mínimo de cohesión social y de normalización política, de consagración de los derechos fundamentales y de satisfacción de las reivindicaciones esenciales es una etapa indispensable para el desarrollo y la modernización, un requisito para los actores sociales y económicos y para todas las organizaciones democráticas.

De la complejidad de la situación nacional, unida a una coyuntura internacional única, derivan acontecimientos extraordinarios que debemos definir para reflexionar acerca del porvenir de este país. Por la primera vez en este siglo que está ya cerca de su término, un líder carismático haitiano que profesaba una fe revolucionaria llegó a la Presidencia, confirmando así la posibilidad para las masas de identificarse con un líder que ellas eligieron. Derrocado del poder por los militares, este mismo jefe popular nacionalista, anti-imperialista, fue restablecido en su legitimidad por potencias extranjeras habitualmente solidarias de las clases dominantes en la imposición de soluciones políticas para resolver las crisis. Jamás en un contexto semejante, las diferentes variantes de las Fuerzas Armadas haitianas fueron puestas fuera de juego de una manera tan brutal y tan radical, aunque la operación no fue el hecho, que se diga, de un ejército revolucionario. Ciertamente en 1915, las fuerzas norteamericanas de intervención dispersaron al Ejército tradicional haitiano y tomaron el control del Estado haitiano. Pero a pesar de las similitudes, la situación actual no se compara en nada, ni en los objetivos, ni en los métodos, ni en las circunstancias históricas, a la ocupación de Haití por



los Estados Unidos, a principios de este siglo. Por lo tanto, al estar rotos los hitos, el desasosiego alcanza a todos los sectores; los discursos están confusos, los hombres irreconocibles.

En este período de transición propicio a todas las confusiones en las que vienen a refractarse las opiniones más contradictorias y las conductas más sorprendentes, nos asalta la tentación de decir que el proyecto democrático está hipotecado. Pero, primero debemos precisar lo que diferencia la situación de hoy de la de ayer. Observamos lo siguiente: (1) la movilización popular y una mayor conscientización socio-política, (2) la profundización de la crisis del Estado y el debilitamiento, la decadencia y después la derrota del Ejército, (3) la debilidad del movimiento democrático y su incapacidad a cumplir los requisitos políticos y organizacionales para la construcción de un nuevo orden democrático, (4) la intervención extranjera consecutiva al trastrueque del orden mundial y el establecimiento de nuevas condiciones a nivel internacional, caracterizadas por el rechazo de las dictaduras, el reconocimiento de la necesidad operacional de la democracia, la promoción mundial de los derechos del hombre gracias a la movilización de las solidaridades y de los medios de comunicación. Estos cuatro grupos de factores, a los que hay que agregar la dinámica de las luchas por el poder, explican la dimensión crítica del problema haitiano.

No analizo aquí las peripecias de la crisis relacionadas con las condiciones de la construcción de la democracia en mi país. Mi propósito quiere ser ante todo una reflexión sobre el estado en que se encuentra hoy en día el proyecto democrático haitiano cuyos esclarecimiento y dinamización constituyen un prerrequisito para el análisis de los desafíos que enfrenta la democracia en toda la isla. Esta reflexión tiene su origen en una constatación: nos falta mucho todavía para llegar a la normalización democrática, es decir al punto de partida seguro hacia un nuevo régimen que abre nuevos horizontes para el funcionamiento normal de las instituciones, para la construcción verdadera de un nuevo Estado fuerte y solidario, para el agrupamiento organizado de las fuerzas vivas dentro de un amplio movimiento patriótico. De esta constatación, dirijo mi reflexión hacia los principales actores políticos susceptibles de influenciar el desarrollo del proyecto democrático, es decir, ante todo, el movimiento democrático concretizado en sus diferentes componentes, ampliamente dominado por el liderazgo carismático de Aristide, por una parte, y las potencias tutelares a través de su intervención en Haití, por otra parte.

## **2. Las fuerzas en juego en el movimiento democrático y sus responsabilidades**

El movimiento democrático, entendido como el conjunto de las iniciativas, partidos, grupos, organizaciones, que surgieron en el país bajo la dictadura y que ampliaron sus actividades en los años 80, desempeñó un papel decisivo en el aceleramiento de la conscientización social y política y en el derrocamiento del régimen. Bajo múltiples formas de intervención, siguió siendo durante mucho tiempo después de la salida de Duvalier el amplio espacio socio-político para la defensa de las conquistas y el lugar de proyección de las esperanzas democráticas. Incluso si no supo, o no pudo, dotarse de instrumentos políticos a la altura de las esperanzas depositadas en él, representó el paso obligatorio hacia la normalización política. En noviembre de 1987, se encaminaba hacia un triunfo electoral seguro bajo la bandera del FNC (Frente Nacional de Concertación). En 1990, después de muchos infortunios y desgarraduras, fue otra coalición del FNCD, "*Lavalas*", bajo el liderazgo de un jefe carismático (Aristide) que movilizó al electorado y logró la victoria en las urnas. Estas coaliciones se fraccionaron cada vez. Reagrupadas de nuevo para poner en jaque al golpe de Estado, no resistieron los conflictos consecutivos a la reconquista del poder por Aristide. En semejante contexto, para definir correctamente la problemática de la democracia en Haití, y sin prejuizar de la importancia de los demás factores de explicación, nos parece fundamental evaluar las fuerzas que están en juego en el movimiento democrático, analizar el impacto de su fragmentación en el proceso democrático, su responsabilidad en el desenlace de la crisis y en la normalización política e institucional.

### ***a. El impacto de su fragmentación***

Durante todo el período del golpe de Estado, el regreso al orden constitucional y la reintegración de Aristide constituyeron un prerrequisito indispensable a la reactivación del proceso democrático. Siendo admitido este postulado por todos los sectores del movimiento democrático, había que aprovechar este tiempo

de reflexión para preparar la reactivación, tomando en cuenta no solamente los recursos y las fuerzas que actúan en favor de la democracia sino también el estado de deterioro del país, la rasgadura en el tejido social y las condiciones específicas e insólitas impuestas a la lucha de los legitimistas por el papel dominante de la comunidad internacional y el peso considerable de los Estados Unidos. El deber de todo demócrata, y, máxime, de toda organización dedicada a la instauración de la democracia en Haití, consiste en preguntarse si el proceso democrático interrumpido por el golpe de Estado se ha reactivado en la buena dirección y en buenas condiciones.

Si bien, gracias a la intervención extranjera, se pudo suplantar a los militares y volver a colocar a Aristide en la Presidencia, no podemos decir que se realizaron avances considerables en materia de preparación política, estratégica y técnica de los dirigentes nacionales, preparación que es indispensable para la recuperación del país, dado lo inmenso de la tarea que está todavía por hacer. Lo que observamos, más bien, es lo agudo de las rivalidades, amortiguadas antaño en el seno del movimiento democrático y la amplificación de las contradicciones que incubaban desde hace mucho tiempo, que estallaban aquí y allá, conforme *Lavalas* iba avanzando hacia la reconquista del Gobierno. Se ensañaron en disputarse el poder con adversarios sin preparación, sin otro proyecto que los eslóganes sobre la justicia, la democracia, la participación popular. No se hace política sin plantearse la problemática del poder y por lo tanto la problemática del enfrentamiento de los grupos rivales y de la necesidad de las alianzas. Más vale estar claro al respecto antes de llegar al poder en vez de arreglárselas después con una respuesta impuesta por las circunstancias. El impacto de las luchas de poder en el proceso de democratización aparece entonces como un elemento importante de la situación política actual: la perversión del proyecto democrático y su degradación en exclusiones pasionales, en conflictos de intereses de grupúsculos y de clanes.

No tenemos estructuras sólidas de organización popular. Los sindicatos, al igual que los partidos políticos, luchan por sobrevivir en un contexto socio-económico y político extenuante. Hasta ahora, hemos tenido movimientos, nebulosas, al lado de grupús-

culos que tratan de tomar el poder por asalto, pero no tenemos aún grandes agrupaciones políticas, rigurosamente organizadas y disciplinadas. Estos movimientos se apoyan en redes de *Ti Legliz* (comunidades eclesiales de base), de asociaciones profesionales, de organizaciones cívicas y populares diversas e incluso de ONG. Son precisamente las mismas en que descansa la fuerza del liderazgo de Aristide. La historia reciente ha mostrado la eficacia de la acción política y de las técnicas de propaganda de muchas fuerzas de intervención que surgieron de ellas. También nos ha enseñado que eran mucho más diestras para protestar y deshacer que para producir un verdadero proyecto social y construir una estrategia de democratización de la sociedad haitiana.

No se puede negar el papel histórico de la Iglesia católica, y en particular de los estamentos más bajos de la Iglesia ("la pequeña Iglesia"), en la desestabilización del régimen duvalierista a partir de 1981. Conocemos todos el gran valor táctico de la orientación y dirección del movimiento democrático por la Iglesia católica durante la última etapa de la lucha contra la dictadura y pudimos apreciar su fuerza de intervención en la crisis de transición hasta el momento en que se fraccionó durante la tormenta social y política. El episcopado perdió el control de las organizaciones eclesiales de base que tienen, por su influencia ideológica y su capacidad organizacional, un peso decisivo en el seno del movimiento social. La acción política de estas organizaciones, a través de los mecanismos de la Iglesia y por la intervención marcada de algunas personalidades eclesiásticas, las lanzó en medio de la lucha política y, progresivamente, de la lucha por el poder. Tan pronto los sacerdotes se convierten en actores de las luchas de poder, exponen a sus instituciones a un sin número de desviaciones, haciéndoles perder al mismo tiempo su papel de refugio para los partidarios de la libertad, tal como sucedió bajo la dictadura. Al no encontrar otra organización nacional laica consecuente que las sustituya, porque no la había, siguieron el rumbo lógico de su compromiso político. Ya sabemos en que vino a parar todo esto.

Ciertamente las luchas de poder son inherentes a la vida política. Todo el problema consiste en saber como enfocarlas y encauzarlas dentro de un ámbito socio-político específico, en un contexto de crisis generalizada que requiere la movilización de las

fuerzas en una base patriótica. A falta de ejercer una influencia determinante en el contexto actual de reflujó, las agrupaciones políticas democráticas tienen todavía un papel importante que jugar por el simple hecho de existir y de participar en las luchas de poder. Debemos por lo tanto seguir escudriñando sus enfoques actuales, sus propuestas, sus proyectos relacionados directamente con la reconstitución de la escena del poder sobre la cual el sector *Lavalas* ejerce su dominación. ¿Cuál es su verdadero nivel de preparación estratégica y táctica? ¿Cuáles son sus propuestas respecto a los grandes problemas del momento, a los aspectos concretos de la democratización de la sociedad haitiana y del desarrollo del país? ¿Cuáles son las reformas fundamentales que deben proponerse? ¿Cómo situar todo esto en relación a *Lavalas*, cuyos mensaje y acción de connotación mesiánica caracterizaron los siete meses de Aristide en la Presidencia y los tres años en el exilio?

Todo el mundo constata el aniquilamiento de las demás fuerzas políticas, asociadas de una manera u otra a las distintas maniobras de los golpistas o de los gobiernos surgidos del golpe de Estado. Vencidas, no tenían posibilidad alguna de reconquistar el poder por medio de las elecciones o por cualquier otro medio político, lícito, ilícito o violento. En 1995, después del regreso de Aristide, la posibilidad de llegar al poder por la vía electoral se circunscribía a las principales corrientes del movimiento democrático del que se desprendieron las organizaciones afines a Aristide, es decir el KONAKOM, el FNCD y la OPL. Una de las consecuencias de esta situación fue la fragmentación de la gran familia legitimista en facciones hostiles. Así, el KONAKOM y el FNCD, unidos antaño en la misma lucha por el restablecimiento de la legalidad constitucional, rompieron su alianza para enfrentar, de manera separada, el período posterior al golpe de Estado. Un poco más tarde, el FNCD conocerá a su vez una nueva división. Dentro del propio *Lavalas*, aparecían pequeños grupos organizados en partidos a los que les sería muy difícil justificar su existencia (MOP, *Louvi Baryè*, FROP, etc.).

Necesitamos mucho tiempo todavía para captar todas las dimensiones y la verdadera naturaleza de esta nebulosa. En el amplio espacio aristidiano, observamos influencias contradictorias.

Algunas apostaron a la fuerza del jefe carismático, al que incitaron a desconfiar de las organizaciones y de los organizadores; otras, bajo el empuje de antiguos dirigentes comunistas, abogaron por la transformación del movimiento en organización estructurada; otras, que seguían fieles a los objetivos revolucionarios, soñaron, y siguen soñando, con una especie de federación de organizaciones populares orientadas decididamente hacia una larga lucha de depuración y la instauración de un poder popular.

### ***b. La experiencia Lavalas***

Entre la pureza de las intenciones y la realidad de la lucha política tal como la vivimos recientemente (“operación regreso”, reconquista del poder, relaciones estrechas con el amigo norteamericano, elecciones, etc.), se produjo una especie de confusión, fruto de las luchas de facciones en el seno de la familia reinante. La OPL fue la que, por su capacidad organizacional, ocupó casi todo el espacio, excluyendo al FNCD y al KONAKOM. Se les adelantó aprovechando el período de lucha contra el golpe de Estado y acabó imponiéndose como socio de primera importancia en el espacio aristidiano. La multiplicidad de los partidos, fuera y dentro del movimiento democrático, hubiera podido hacer creer que el pluralismo existía por fin en el sistema político haitiano, pero no conseguía esconder la realidad de la supremacía aristidiana con la que la OPL se había acomodado hábilmente.

En realidad, la OPL había llenado un vacío, el vacío organizacional aristidiano. Se había impuesto claramente en las elecciones legislativas de 1995. El jefe carismático y la organización se necesitan mutuamente, ésta para apoyarse en la popularidad del líder, aquel para aprovechar la experiencia y la aptitud de la organización para trabajar sobre el terreno y para realizar la campaña electoral. Sin embargo, observamos que el Palacio Nacional logró que, en dicha circunstancia, se formara una coalición, llamada Plataforma *Lavalas*, a la que se incorporaron algunos jefes aristidianos, entre ellos René Préval, y otros grupúsculos, entre ellos una fracción del MOP y el partido *Louvi Baryè*, fundado por Renaud Bernardin, otro jefe aristidiano. En esta trayectoria, que es también la de una lucha de poderes, el

KONAKOM y el FNCD, de los cuales, en algunos círculos, se ponía en duda de que pertenecieran verdaderamente a la familia *Lavalas*, fueron dejados a un lado. Ellos no podían apoyarse en redes seguras, a diferencia de los aristidianos ligados al sector de las *Ti Légliz*. Sólo fueron convidados a la mesa (*Bô tab la, eslogan electoral de la plataforma Lavalas*) los que podían aportar pruebas de su gran pureza, es decir los que no habían sido catalogados como enemigos porque ya habían transigido con el golpe de Estado o que no eran tildados de sospechosos porque su conducta pasada habría facilitado la realización del golpe de Estado o porque su comportamiento político posterior habría servido el propósito de los norteamericanos. Todos sabemos como transcurrieron, en este caudal de suspicacias, las elecciones legislativas y presidenciales de 1995. Prácticamente en un plan que, en condiciones tales, que uno llega a dudar de la aptitud de algunos demócratas para emprender efectivamente el proceso de modernización y de democratización. En efecto, todas las operaciones relacionadas con la celebración de estas elecciones (formación de un CEP, ley electoral, registro electoral, desarrollo de la votación, conteo de votos, etc.) fueron o bien tachadas de irregulares o bien denunciadas en algunos casos por abusos de poder y maniobras fraudulentas. La escasa participación de los electores acabó ensombreciendo este ejercicio democrático que es, sin embargo, fundamental para la legitimidad de los funcionarios recién electos y para la solidez del nuevo Estado que se está construyendo.

La experiencia *Lavalas* introduce nuevos elementos por su experiencia del poder, pero también por la intensidad de la acción política organizada alrededor de la personalidad de Aristide después del golpe de Estado. La coyuntura era favorable para que *Lavalas* intentara crear una organización de masas y lo lograra, a pesar de las intrigas políticas, de las fisuras y de las dificultades debidas al exilio. En la perspectiva del regreso al poder, habría sido deseable que surgiera por fin del desastre un verdadero liderazgo ilustrado, modernizador e imaginativo, apoyado en una agrupación política estructurada, que impulse un verdadero proyecto de sociedad y la puesta en marcha de un verdadero movimiento nacional. Habrá sido necesario esperar el término de un

mandato presidencial políticamente dudoso en 1995-1996 y por ende la intensificación de las luchas por el poder en el seno de la familia *Lavalas* para ver a Aristide intentar, con torpeza, construir una organización política. Sin embargo, el dominio aplastante de Aristide no excluía en absoluto la posibilidad de que los demócratas de otras tendencias fecundaran otras agrupaciones existentes en el campo político o en el área asociativa. Tampoco los absuelve hoy en día de su responsabilidad en la situación actual.

*Lavalas* ocupa el espacio del poder. Su hegemonía es indiscutible. Pero la situación política general sigue siendo inestable a pesar del inicio de normalización *lavalasiana*, a pesar de la instauración de las instituciones centrales, a pesar del hastío que se apodera de la gente después de tantas convulsiones. Más de dos años después del restablecimiento de la legalidad constitucional y más de tres meses después del fin del mandato de una tercera parte de los senadores (abril de 1997), se está intentando formar por primera vez las asambleas territoriales establecidas por la Constitución de 1987 y organizar elecciones al Senado, en un clima de desinterés notorio de parte del electorado y de la protesta ruidosa llevada a cabo por grupos que se oponen a la política económica del Gobierno, si no es que tratan de desestabilizarlo.

La situación es frágil también. Lo notamos en la reaparición casi ritual de la inseguridad. Banditismo, terrorismo, asaltos, organizaciones paramilitares, provocaciones, no podemos excluir nada a priori. Tampoco debemos ceder a la paranoia ni erigirnos en la eterna víctima designada de fuerzas ocultas. Nadie sabe cómo estará el país cuando se marchen las fuerzas extranjeras. Mirándolo bien, todo esto debería inspirar una estrategia, formas de organización, iniciativas que expresen con claridad y determinación una perspectiva de futuro tranquilizadora para el proyecto democrático. Es preciso pues preguntarnos dónde nos encontramos hoy, después de la restauración aristidiana.

Primera constatación de importancia, la normalización *lavalasiana* se llevó a cabo con la ayuda de fuerzas externas, y por consiguiente bajo supervisión extranjera y en condiciones económicas y políticas dramáticas, con repercusiones en todos los aspectos de la vida nacional. En lo que respecta a la seguridad, a los



proyectos económicos y al seguimiento político, el Estado está bajo tutela. En lo que respecta a los servicios, es ineficaz. Esta situación contradice el discurso típico *lavalasiano*: revolucionario, nacionalista, anti-burgués y anti-imperialista. Menuda contradicción, tanto más difícil de superar que los que están en el poder todavía no disponen verdaderamente del mando ni de medios autónomos para una política diferente a la que impusieron las potencias dominantes.

Segunda constatación de importancia, este poder oscila entre tres polos políticos: Prével, Aristide y la OPL, haciendo caso omiso de los marginados y de los grupos periféricos que pertenecen todos al espectro *lavalasiano* y tres polos constitucionales: la Presidencia, la Oficina del Primer Ministro y el Parlamento. No todos se entrecruzan, excepto en lo que se refiere a Prével y a la Presidencia. E incluso ahí, la influencia y la fuerza de presión de que dispone Aristide deben de ejercerse con tanta fuerza que uno podría tener tendencia, algunas veces, a fusionarlos. Sin embargo, el poder de Prével se va formando lejos de Aristide porque no hay más remedio, siendo la Presidencia lugar y fuente del poder. No me extiendo aquí en este punto, necesario para comprender las relaciones entre los actores sociales y políticos de la escena nacional. Lo señalo como un elemento de reflexión que podría ampliarse acerca de la problemática de la democratización, dada la posición dominante de Lavalas en la escena del poder y su impacto en el destino del movimiento democrático.

En resumidas cuentas, se deduce de todo lo anterior que el poder actual no es monolítico sino pluripolar con una tendencia marcada a la hegemonía aristidiana. De un polo a otro (Presidencia, Oficina del Primer Ministro, Parlamento; personalidad, partido), es la lucha entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo arcaico y lo moderno, y la línea divisoria pasa también dentro de cada componente. Resulta de ello una situación de confusión cuyos efectos se hacen sentir al mismo tiempo a nivel del Estado, cuya autoridad está desairada regularmente, y en la vida diaria de los ciudadanos. Enfrentamientos destructores caracterizan las relaciones entre las facciones *lavalasianas*. Las luchas de poder pueden mucho más que la necesidad de una convergencia política inspirada por un

liderazgo ilustrado. Situación dañina para la democracia, para la normalización política e institucional en un país necesitado, aquejado por la miseria económica, la fractura social, la dependencia extrema.

No existe fuerza alternativa verdadera para este poder. La oposición democrática, la que se manifiesta a través de los partidos constituidos, insertados en el marco legal del régimen político, no tiene consistencia. Las declaraciones sobre los problemas pasajeros, las denuncias de las artimañas y de las maniobras monopolísticas del Gobierno en período electoral no bastan para convencer a los electores ni para asegurar la promoción de los diferentes partidos a la categoría de fuerzas políticas significativas. Es cierto que encuentros regulares de concertación y reflexión se celebran entre varias agrupaciones de la oposición, y en particular con el KONAKOM, el FNCD, el PANPRA, el RDNP, etc. Lo deseable sería que de sus deliberaciones saliera una contribución positiva a la democratización en términos de ideas, de proyectos, de convergencia de acción. Mientras tanto, los ecos de sus voces siguen siendo débiles.

Les cuesta trabajo a los partidos arraigarse pero ya no desaparecen después de las elecciones, lo cual es algo nuevo en la historia política haitiana. ¿Será esto un signo de los tiempos o el indicio de que la transición no ha terminado aún? Ahí nuevamente se enfrentan lo antiguo y lo nuevo. Los partidos existen desde 1986, sobrevivieron a tres intentos de normalización, pero no tienen un verdadero peso en la vida política, en la medida en que nadie cree en su aptitud para conquistar el poder. Parecería como si la opinión y toda la maquinaria de los medios de comunicación sólo tuvieran ojos para el poder. Los tutores también. Estos parecen apostarle solamente al bando *lavalasiano* pero al mismo tiempo siguen manteniendo a algunos grupos bajo perfusión. Ellos van desde Préval, Jefe del Estado, a las autoridades legales, de Pierre-Charles, dirigente de un partido influyente en el Parlamento a Aristide, actualmente en posición de reconquistar la Presidencia. Hacen sondeos aquí y allá e incluso cultivan sus relaciones con toda la clase política. Pero, lo que buscan ante todo es invertir en los grupos con vocación de poder, capaces de garantizar la normalización política. Cuanto más débil es la oposición tanto

menos dispuestos están los grupos de intereses a invertir en ella, no hace falta ni decirlo. Si los FNCD, KONAKOM, MIDH, PANPRA, RDNP, etc., no son capaces de construir una alternativa a *Lavalas* será ¿porque éste goza de un apoyo y de una aceptación populares entusiastas? No está muy seguro. La abstención masiva del electorado en las contiendas legislativa y presidencial de 1995 y, más recientemente, en las elecciones de 1997 cuya finalidad era constituir las Asambleas Territoriales y sustituir la tercera parte de los senadores invita a reflexionar sobre la magnitud del divorcio entre el país profundo y la nueva clase política. *Lavalas* goza de una posición ventajosa, fruto de la coyuntura. Lo que parece esparcirse entre la población, por ahora, es la desilusión, la decepción frente a las incoherencias del Gobierno y a la corrupción de muchos miembros del poder *lavalasiano*.

Con todo y esto, este largo período de confusión constituye una etapa probable para la elaboración de un armazón institucional del que saldrá el modelo *lavalasiano* de ejercicio hegemónico del poder. En este contexto, el peso del liderazgo carismático seguirá siendo considerable en el movimiento social. Puede hacerlo derivar hacia la perversión, desembocando en una especie de cesarismo, o ayudarlo a tomar resueltamente el camino de la organización democrática.

### **3. Los límites del liderazgo carismático**

Las promesas de democracia, justicia y bienestar siguen siendo taquilleras. Hasta podríamos afirmar que las luchas socio-políticas sólo parecen justificarse por la esperanza democrática. Pero la democracia es una idea nueva en Haití. No tiene la capacidad lírica de encarnarse en sectores sociales, en actores políticos o en organizaciones natural y espontáneamente identificables, como fue el caso en 1804 para la libertad y la Independencia, en 1930 para el nacionalismo y en 1946 y 1956 para el negrismo; o también en 1867 y 1946 para los líderes carismáticos (Sylvain Salnave y Daniel Figolé) que simbolizaban las luchas populares. Despojada de lo concreto emocional, reclamada por todos, la idea de democracia parece abstracta, difusa, y por consiguiente más difícil de utilizar como combustible social. “La democracia no es una

religión: por sí sola, no establece lazos. Las realidades colectivas se hacen con lo imaginario y no solamente con lo simbólico; con poetas y relatos, no solamente con juristas y reglamentos.”<sup>1</sup>

En la coyuntura del período 1985-1990, si bien el anti-dualismo era movilizador, el ideal democrático no había adquirido todavía la fuerza de exaltación necesaria a las grandes concentraciones y a la identificación automática con actores o individuos símbolos. Desde las elecciones de 1990, lo que moviliza a las grandes masas, es la aparición del hombre providencial que asume la responsabilidad de todas las promesas. Pero los medios para cumplirlas no están al alcance inmediato de un poder, cualquiera que sea, y el hombre providencial, después de llegar al poder, se ve confrontado con la ingrata realidad a la que no consigue arrancar los recursos necesarios para cumplir sus promesas. De ahí las decepciones, los desconciertos y las resacas después de la euforia de la victoria y de la toma del poder. En resumidas cuentas, el hombre providencial, como cualquier hombre, es frágil, vulnerable y mortal. Si llega a retractarse o a desaparecer, deja desamparados a todos los que, por devoción, por facilidad, por comodidad, por oportunismo, se lo habían jugado todo a su poder para alcanzar sus objetivos. En este caso, deja sin defensa a la democracia y huérfano al movimiento democrático, expuesto a todas las bajezas y a todos los desaciertos.

El movimiento democrático no sufrió una derrota ni experimentó una desbandada solamente el día en que Aristide fue derrocado. Hacía ya muchísimo tiempo que había echado a perder sus posibilidades de organizarse, de reforzarse y de imponerse como el paso obligatorio hacia cualquier solución política a la crisis de transición. Más grave aún: había ignorado la necesidad de proponer al país un proyecto coherente de transformación social y una nueva orientación política que promoviera valores nuevos para oponerse a la cultura política tradicional basada en el poder presidencial y, ocasionalmente, en el hombre providencial. Hubiésemos podido darnos cuenta desde la experiencia del poder aristidiano, en 1991, que este mismo pueblo que aprobó con en-

1. - Régis Debray: *Contretemps*, Folio Actuel, Gallimard, p. 178.

tusiasmo la Constitución anti-presidencialista y anti-duvalierista de 1987 es exactamente el mismo que no entiende que ésta se imponga a su líder y que le impida toda tentación autocrática. Lo mismo les sucede a los políticos, antiguos y nuevos, algunos de los cuales no aceptan que se les aplique cláusulas constitucionales que no convienen a sus intereses del momento y que, sin embargo, ellos habían contribuido a imponer en beneficio del proyecto de democratización.

Cuando analizamos los acontecimientos relacionados con el proceso de búsqueda de una salida al golpe de Estado, cuando examinamos las condiciones particulares del regreso a la legalidad constitucional y el peso de las potencias tutelares, cuando evaluamos el papel y la acción de las diferentes organizaciones del bando democrático, podemos lamentar que éstas, independientemente de cualquier obstáculo táctico, y Aristide, sobre todo en su papel de dirigente principal y de guía, no hayan tratado de compensar la pérdida de la autonomía nacional y la desbandada de las instituciones constitucionales por un mensaje político claro y fuerte. Nos preguntamos si el carisma de Aristide no deslumbra más de lo que alumbraba. Por lo general, un liderazgo se funda en dos requisitos a veces contradictorios: debe expresar, reflejar las aspiraciones de la base pero también debe explicar y convencer, conducir y administrar las reivindicaciones para que la expresión de éstas sea eficaz y constructiva. El líder en el poder debe tratar de mantener constantemente el equilibrio entre lo deseable y lo posible. Se coloca a la cabeza sin adelantarse demasiado; da la vuelta sin intentar esconderse entre las masas. No es un reflejo pasivo de las demandas de la base; recibe, interpreta, propone y decide.

Hemos visto a Aristide acostumbrarse a citar las demandas y la voluntad del pueblo como argumentos en situaciones difíciles. Según las circunstancias, lo llama a manifestarse o interviene personalmente como intérprete de la voluntad popular. Esta actitud, imitada por sus seguidores, constituye en definitiva o un refugio político cómodo o un argumento decisivo para descalificar a su adversario, acusado a menudo de traidor. Las organizaciones populares son las que sirven de pantalla en esa circunstancia. Esto se llama participación popular. Pero, ¿en qué consiste exactamente esta participación popular? ¿Bajo qué formas y en qué

sitios puede el pueblo expresar sus preferencias y sus deseos? ¿Quién los expresa? ¿Con cuáles condiciones podemos garantizar su legitimidad y su autenticidad? ¿Qué nos enseña la historia de las luchas populares recientes? ¿Qué son las organizaciones populares? ¿Bajo qué formas concretas se vive la democracia dentro de ellas?

Estas preguntas son tan pertinentes como las que podríamos dirigir al líder interpelado. Cuando éste se dirige al país, no esperamos que lo deslumbe con frases líricas sino que lo alumbre con sus análisis pertinentes, que contribuya a desbrozar el camino, a construir un itinerario. Las contradicciones, las debilidades, los titubeos son inevitables, pero un hombre de combate y de convocatoria debe reconocerlos y asumirlos para estimular, organizar a la gente y llevar a bien un proyecto.

En vez de un liderazgo firme y lúcido que asume los infortunios, explica los desaciertos y las debilidades, en vez de un discurso que piensa en su globalidad los múltiples aspectos de una realidad compleja y difícil, en vez de un proyecto estructurado y coherente que traduce una visión del futuro acompañada de propuestas de recuperación económica, de desarrollo social, de restauración institucional, de promoción de la justicia, etc., nos toca una política de espera de parte de las organizaciones democráticas no lavalasianas, discursos morales sobre la reconciliación y la justicia de parte del poder aristidiano restablecido por las fuerzas internacionales, la borrachera de la asistencia internacional, medidas de improvisación, titubeos que incrementan la confusión reinante.

No debemos perder de vista que si la fascinación por el salvador es una de las características de la cultura política haitiana, se opone sin embargo a la lógica profunda del proyecto democrático que se basa en la representación social y política en varios niveles y que pone sus esperanzas en que los ciudadanos organizados van a ser los que se harán cargo de los problemas de sus comunidades. Sin embargo, la personalidad carismática constituye uno de los datos del problema, un factor nada despreciable en el proceso de democratización. La enorme autoridad que la devoción popular otorga a Aristide no es dañina en sí. Presidente o no, él puede desempeñar un papel decisivo en el destino del país. Desde 1991,

yo no paro de repetirlo: “tomando en consideración la tradición, la llegada de un líder carismático a la primera magistratura del Estado puede o bien constituir un factor de interferencia en el necesario trabajo de depuración del presidencialismo a la haitiana o bien, por lo contrario, ser un aporte valioso a la causa de la democracia haitiana al facilitar la implantación del nuevo régimen constitucional. El Presidente puede, si está convencido de ello, aprovechar su carisma, sus cualidades morales y la confianza popular para hacer avanzar la causa de la democracia, hacer que la vía sea irreversible, es decir trabajar activamente para colocar las bases del régimen democrático, para poner a funcionar las instituciones, a veces en detrimento incluso de sus intereses políticos inmediatos. En resumidas cuentas, nada impide que un líder sea al mismo tiempo carismático y demócrata, que trabaje energicamente para facilitar la implantación de la democracia con plena consciencia de sus medios y pleno conocimiento de los datos de la coyuntura.”<sup>2</sup> Un líder carismático dominante, en las condiciones de la lucha política actual en Haití, sólo constituye un peligro para la democracia en la medida en que manifieste una ausencia total de visión, un rechazo de la organización, una voluntad de proyectar una personalidad omnisciente y una incapacidad a desenredar la complejidad de la situación, y por consiguiente a manejar las múltiples contradicciones, los embrollos de intereses y de ambiciones.

#### **4. La coyuntura internacional**

Las potencias tutelares tienen un peso considerable en el destino de Haití. El acontecimiento más importante de la última etapa de la crisis es, sin lugar a dudas, la intervención militar norteamericana. Ella suscita un sinnúmero de controversias y los demócratas parecen bastante incómodos frente a una situación que lastima la sensibilidad nacional. Al respecto, es necesario, ahora más que nunca, hablar la verdad. La liberación del régimen golpista no debe presentarse como una coacción independiente de la voluntad de Aristide, como una consecuencia, exclusivamente, de la política norteamericana impuesta al país. También es el resultado

2 - Claude Moïse: *Une Constitution dans la tourmente* (1987-1993), Images, Montréal, 1994, p. 63.

de una decisión estratégica de lucha para acabar con los excesos de la coalición más reaccionaria y más violentamente hostil a las exigencias del proyecto democrático. Elección dolorosa para los demócratas pero justificable en el contexto mundial. La intervención no era ni buena ni mala: las necesidades de la política norteamericana y la terquedad criminal de los militares la hicieron posible; y Aristide, paladín renombrado del nacionalismo y del antiimperialismo, al quererla, la hizo aceptable.

El mundo vivió importantes cambios en los años 80 y 90. De ahí resultaron, en muchos casos, verdaderos traumas y una gran desorganización en las relaciones entre Estados. En la época de la Guerra Fría, con la existencia de los dos bloques, las cosas estaban claras. Cada cual escogía su bando, cuando podía hacerlo, y las intervenciones de las potencias dominantes no dejaban lugar para ningún equívoco. Sabemos lo que fue de la Unión Soviética y no hemos terminado aún de evaluar las consecuencias de la derrota del comunismo. Es cierto que el poder comunista postmaoísta sigue ejerciendo su dominio en la sociedad china, pero paralelamente practica una política económica de apertura y de liberalización que deja entrar bocanadas de aire fresco para el capitalismo. La entrada del capital extranjero, la participación del sector privado en las empresas estatales, la apertura controlada del mercado, todos estos factores tienden a reorientar la política internacional de Beijing y a modificar su estrategia en las instituciones internacionales. En la ONU, donde China posee derecho de veto, no obstaculiza las maniobras de las potencias occidentales (la guerra contra Iraq por ejemplo). Hoy en día, el marco bipolar para elegir ha desaparecido, el juego de las potencias se ha confundido un poco y sus intervenciones se vuelven más matizadas. La fragmentación da origen a varios bandos, por encima de los cuales descollan los Estados Unidos, potencia colosal pero variable, cuya diplomacia navega entre la intervención y la retirada, entre la amenaza y el compromiso negociado. También favorece la proliferación de las especificidades, entre las cuales se destacan los nacionalismos agresivos, los conflictos étnicos y religiosos de una violencia increíble, los flujos migratorios difíciles de controlar. Bajo el nuevo orden, parece ser que los atolladeros se van a multiplicar.



A pesar y sobre todo a causa de su fuerza económica, las grandes potencias no pueden deshacerse de las coerciones externas que resultan de la «nueva revolución industrial», de la revolución del computador y de la telemática. La globalización de la economía y las subsiguientes estrategias de penetración de los mercados obligan a las empresas a modernizarse, a tornarse más competitivas e incrementan la responsabilidad de los Estados de garantizarles un entorno local de modernización y de competitividad apropiado. Las políticas varían según el tamaño de las economías y la importancia de los Estados, al igual que las consecuencias sociales. En este contexto, ¿Qué pasa con los países subdesarrollados? ¿Deben aguantar como una fatalidad el proceso en curso? ¿Tienen ellos la capacidad de forjarse una vía de desarrollo fuera de este esquema global?

En el plano de las relaciones internacionales, estamos todavía inmersos en el período de reestructuración, fruto del aceleramiento de la globalización económica y del derrumbamiento del orden internacional surgido de la Guerra Fría, lo cual nos hace hablar de un nuevo orden mundial con dimensiones económicas y políticas. En dicho contexto es que se desarrolla la crisis haitiana y esto cambia significativamente los datos de nuestro problema.

Es cierto que “el nuevo orden mundial” no está basado del todo en el derecho ni en el reconocimiento por las grandes potencias de una necesaria solidaridad con los oprimidos. Pero queramos aceptarlo o no, están constreñidas a tomar en consideración los movimientos de ideas a través del mundo o lo que se llama la conciencia universal. En los hechos, ésta se convierte en un factor político que, tarde o temprano, pesa en las elecciones y en las estrategias. Las garantías internacionales de la protección de los derechos del hombre, consagradas en convenciones, son vinculantes para los Estados. El individuo sujeto del derecho internacional tiene teóricamente vías de recursos pero el rol que juega la opinión pública internacional es fundamental en la lucha contra los asesinos de la libertad. En este contexto, debemos considerar el papel importante desempeñado por los grupos de presión, las ONG, la ideología humanitarista cuya creciente influencia se deja sentir en la política de los Estados.

Por cierto, es la destrucción del orden antiguo que, al trastornar los modelos y al destruir los hitos, propulsa a los oprimidos en el nuevo escenario. Las grandes potencias no renuncian ni a sus intereses ni a sus privilegios, ni siquiera a sus métodos. Se ven obligadas a modificar su política, a adaptar su estilo a la nueva situación, a inventar nuevas estrategias de intervención. Así, la nueva administración de las sociedades tradicionalmente condenadas a la opresión dictatorial requiere alguna modalidad de normalización democrática, calificada de democracia de baja intensidad. Esta aparece en lo sucesivo como un elemento nada despreciable de sus estrategias. Se incorpora a los objetivos de la política de seguridad migratoria, común a las grandes potencias. La lógica de los derechos del hombre corresponde también a la necesidad de contener el flujo insoportable de los refugiados, en un contexto económico y político nuevo.

¿Qué hacen mientras tanto los países pobres? ¿Qué hace Haití? ¿Están reevaluando su propia estrategia, si es que tienen una? ¿Conservan las mismas matrices de análisis para sus relaciones con las potencias dominantes? ¿Pueden inventar nuevas relaciones eficaces entre sí o se ensañan en hacerse competencia cuando se posicionan en el mercado dominado por las grandes potencias? A primera vista, podemos observar que los pequeños países, en su mayoría, reciben más bien los impactos negativos de las mutaciones tecnológicas y de la globalización de la economía que las ventajas de éstas: agravación del desempleo, fuga de cerebros, incremento del fenómeno de los refugiados, dramatización de la migración frente a medidas selectivas y drásticas de los países ricos, reforzamiento de la dependencia de la ayuda externa como paliativo a la creciente miseria de los países del Tercer Mundo, expansión de los métodos del crimen organizado, etc.

No existe todavía una teoría del nuevo orden mundial. Varias corrientes se expresan, diferentes tendencias se enfrentan y, si bien las ideas se renuevan, en muchos casos es para dejar paso a estereotipos, para volver a tomar viejas teorías y hacerles un nuevo traje. La dinámica del cambio que alcanza extensas zonas geográficas, apenas si estamos comenzando a pensar en ella en nuestros países. Haití, país débil y pobre, vive en una dependencia extrema, a tal punto que no sólo el Estado sino también, en cierta

forma, las fuerzas políticas locales han aceptado prácticamente, sobre todo después del golpe de Estado de 1991, que la solución de los problemas, agravados por la crisis, sea asumida por el exterior. De hecho, el discurso grandilocuente anti-norteamericano disimula una confesión de impotencia y una realidad persistente: el poder haitiano es un poder dependiente. Conviene preguntarnos, antes que nada, qué se está haciendo, qué podría hacerse, incluso bajo tutela, para hacer progresar la causa de la democracia, de la justicia y del desarrollo en nuestro país. Primero, tomar consciencia del desastre nacional. Acabar de una vez con las ideas falsas y los malos procedimientos políticos. Hacer un inventario minucioso de nuestros recursos. Regenerar la sociedad civil...

Al país no le faltan puntos fuertes que es conveniente identificar. Son de naturaleza geográfico-histórica (ubicación en pleno centro del Caribe, especialmente con relación a los Estados Unidos y a las demás islas en las que se deja sentir su influencia), cultural y humana (los recursos de su población a la cual hace falta agregar sus emigrados o "diáspora" como fuerza adicional inestimable). Cuanto más pequeño es un país, cuanto más limitados son sus recursos, tanto más necesita basar su estrategia de desarrollo en sus recursos humanos. Apostar a nuestra inteligencia y a nuestra imaginación, recurrir a nuevos métodos de administración de los asuntos públicos, promover una sociedad abierta, centrada en la integración de los componentes nacionales, tales son los elementos que deben tomarse en cuenta en la elaboración de una estrategia de desarrollo, de modernización y de democratización. Debemos reevaluar esto y otras cosas más en relación con los problemas mundiales contemporáneos, en el marco de nuestras relaciones de dependencia frente a las potencias tutelares, en la perspectiva de búsqueda de nuevas vías de solidaridad y de promoción de los intereses mutuos de los pueblos vecinos.

## **5. El papel del movimiento democrático hoy en día**

Zarandeado por la crisis, el movimiento democrático ha perdido, naturalmente, sus características de origen. La experiencia de los últimos diez años incita a la prudencia, por no decir a la desconfianza. Debemos tratar de saber a dónde va el movimiento en su conjunto, cuál es su base social hoy en día, cómo se definen

sus componentes. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Quiénes son sus aliados? ¿Quién necesita la democracia para resistir y sobrevivir? Más allá de los trastornos, los desafíos de la lucha democrática siguen siendo los mismos, y los demócratas de todas las tendencias no pueden sustraerse a la obligación de plantear el problema del desarrollo del proyecto democrático, de su papel actual, en esta etapa de construcción de un nuevo Estado, un Estado de derecho, moderno, solitario, no autoritario. Todavía no hemos aprendido a desconfiar de las trampas de lo urgente. Debemos tomarnos el trabajo de replantear los desafíos y emprender a la vez la acción cívica y política, darnos tiempo para reflexionar y discutir los asuntos de envergadura con tanto más rigor cuanto más difíciles son de resolver. El tiempo que perdamos haciéndolo es tiempo ganado para la acción.

Si el movimiento democrático quiere volver a cobrar actualidad decidida y eficazmente, debe comenzar por analizar en profundidad sus errores y sus desviaciones y dar muestras al mismo tiempo de su visión amplia que abarca todas las cuestiones de fondo de la sociedad pero también todas las urgencias y todos los obstáculos. La primera urgencia sigue siendo si no la conglomera- ción organizada, por lo menos la toma en consideración de todas las fuerzas dedicadas a la instauración de la democracia y a la búsqueda de una concertación acerca de los grandes desafíos que plantea la crisis. La labor de persuasión, de negociación y de pedagogía que implica semejante objetivo es dura e ingrata, sobre todo cuando debe llevarse a cabo en ambientes reacios, más propensos a soluciones expeditivas y obsesionados con el poder. Esto no debe ser motivo para no emprenderlo.

### ***a. Cambiar el Estado***

Aquí, la cuestión del Estado es crucial.

La legitimidad de este nuevo Estado demandada por el amplio movimiento social de ruptura es probablemente la autenticidad de su origen democrático, el funcionamiento normal de las instituciones, pero es también su capacidad para desactivar los conflictos sociales, garantizar los derechos del hombre, responder del cumplimiento de las normas de justicia entre la población, ofrecer

a los ciudadanos un mínimo de seguridad y de servicios administrativos eficaces, suministrar servicios básicos, crear y desarrollar una red de infraestructuras públicas susceptibles de mejorar las condiciones de vida de la población. “Una función clave del Estado ... para la cual ... un esfuerzo decisivo de rigor se impone con la mayor urgencia.”<sup>3</sup>

Debemos señalar que el mal manejo administrativo, la falta de imaginación, no son solamente el resultado de la incompetencia y de la inmoralidad de los funcionarios públicos de ayer y de hoy. También dependen de un aspecto de la cultura política relacionado con la percepción histórica, inmediatamente después de la Independencia, de que el poder del Estado era el medio para acceder a la riqueza y a la apropiación de los bienes. Crudamente, podríamos decir que los que están en el poder, cuyo futuro no está nunca asegurado, sacan la mayor parte de sus ingresos no de una actividad productiva sino de los recursos del Estado y de los beneficios del poder. Los recién llegados adquieren rápidamente el reflejo de las prácticas tradicionales, consciente o inconscientemente. La mayoría de los dirigentes, sobre todo después de 1946, pudieron edificar fortunas considerables que sus ingresos lícitos no podrían justificar. En la actualidad, cualquiera que sea la calidad de los grupos en el poder, que tengan o no un certificado de revolucionario, les resultará difícil contentarse con los símbolos de identificación para legitimizar su nuevo poder. Se necesitan medidas concretas para convencer al pueblo de que hay una ruptura con el Estado tradicional opresivo, patrimonial, depredador, corrupto, ineficiente, terrorista.

Para reformar al Estado, probablemente sea indispensable desarrollar nuevos marcos institucionales, tal como lo propone la Carta fundamental de 1987. Esta, a pesar de sus imperfecciones, tachaduras y carencias que perjudican su eficacia, constituye, históricamente, el primer documento de referencia normativa del nuevo Estado. Sin embargo, ni la producción formal de un nuevo régimen político, ni siquiera “los cambios fundamentales registrados en el modo de acceso a la dirección del poder supremo”<sup>4</sup>

3 Frantz Verella: “La crise sociale exige des réponses plus globales à des problèmes complexes”, *Haiti en Marche*, 15 janvier 1997.

4 Michel Hector: “Quelques particularités de l'actuelle sortie de crise”, *Le Nouvelliste*, 27-28-29 février 1996

bastan para cambiar al Estado. También están las fuerzas que ocupan los puestos de poder o que luchan por ocuparlos. Hacer cumplir esta Constitución como texto fundador de este nuevo Estado, es ante todo emprender una lucha consecuente y sostenida, vinculada estrechamente con la visión estratégica y organizacional que ella implica. Pero debemos constatar que desde 1987 ninguno de los componentes del movimiento democrático ha tomado en cuenta que se necesitaba una estrategia para asentar efectivamente el nuevo régimen.

La creación de este Estado es un objetivo del movimiento democrático y es, al mismo tiempo, un prerrequisito de la democratización y de la modernización de la sociedad. Requiere inversiones cuantiosas en recursos materiales, financieros y humanos y medidas enérgicas que sólo puede asumir un Estado políticamente fuerte e institucionalmente sólido. De este Estado es que debe proceder el impulso cuando los actores sociales son débiles. Ahora bien, el Estado existente está amarrado. Este es el círculo vicioso que es preciso romper y en el cual hay que encontrar un punto de apoyo para una estrategia global de democratización y de agrupamiento patriótico. Por esto, la importancia de dirigentes bien capacitados, honrados, conscientes de la misión de dicho Estado, entregados a su servicio como a una especie de mística republicana y vinculados a un auténtico movimiento portador del nuevo proyecto democrático. Por esto también la búsqueda de competencias constituídas por un cuerpo de agentes, de directivos, de funcionarios, ellos también muy capacitados y conscientes de sus responsabilidades. Si la crisis se manifestó primero en el derrumbamiento del Estado tradicional, reveló más tarde toda la amplitud de la ineptitud y de la falta de preparación de los nuevos dirigentes políticos.

### ***b. Estructurar la sociedad civil, consolidar la sociedad política***

No obstante, es importante observar que el porvenir de la democracia depende también del reforzamiento de las organizaciones de la sociedad civil, cuanto más que el propio Estado es débil. Los demócratas deben combatir en dos frentes. Deben contribuir activamente a la instauración de este Estado democráti-

co y fuerte, capaz de garantizar el ejercicio de las libertades fundamentales y las condiciones de desarrollo de la vida colectiva y al mismo tiempo trabajar para estructurar y dinamizar la sociedad civil. La acción democrática debe ser llevada con la misma tenacidad e inteligencia en los dos espacios públicos, el político y el social. Todos los ámbitos de la vida cotidiana son espacios de acción democrática: la escuela, el hogar, la cooperativa, el barrio, el sindicato, etc. Deben sentir que son partes integrantes de una comunidad regida por leyes. Los sindicatos obreros, las ligas campesinas, las organizaciones de hombres de empresas tienen intereses que deben ser reconocidos, pero también tienen responsabilidades ciudadanas que deben asumir, relacionadas con la necesidad de defender los intereses superiores de una nación que aún está por consolidar. No le compete a ningún grupo sectorial, a ninguna organización supuestamente popular, incautarse de la representatividad popular y recurrir a la violencia y a la intimidación para imponer sus puntos de vistas. Las agrupaciones de ciudadanos, las asociaciones profesionales, cuando traducen la diversidad de los intereses, de las ideas y de las iniciativas, representan una posibilidad de reforzamiento y de auto-realización de toda la colectividad, en la medida en que ellos se sientan vinculados a un sistema basado en la equidad y en el reconocimiento de los derechos fundamentales. Así es como comienza una lenta elaboración de fuerzas autónomas que representan intereses diferentes, dispersas en todo el cuerpo social y destinadas, a la larga, a servir de contrapeso al poder político.

Claro está, el movimiento asociativo que se desarrolla dentro de la sociedad civil no podría sustituir la obra fundamental de organización y de inversión que es competencia del Estado y de las instituciones políticas. Ni la solidaridad ni las múltiples formas de ayuda - y menos aún la caridad - son la justicia social ni reemplazan la acción democrática y cívica que debe ser realizada en todos los compartimientos de la sociedad y a través del funcionamiento de las instituciones. Los partidos políticos tienen una misión importante que cumplir a nivel nacional, al igual que en las regiones y en los municipios, no sólo a causa del lugar prominente que se les reconoce en el nuevo régimen constitucional sino, sobre todo, a causa de los requisitos de la emergente democracia

haitiana. Ellos no deben ser solamente maquinarias electorales sino ante todo centros de capacitación cívica y política. Las luchas políticas actuales nos hacen temer el surgimiento del partido único con vocación autoritaria. Por lo contrario, la tendencia contestataria desenfrenada y la inversión excesiva en lo político siguen alimentando ilusiones en grupúsculos que debilitan la sociedad política. Sería deseable que la escena política estuviera ocupada efectivamente por dos o tres grandes agrupaciones con las cuales se identificaran todos los ciudadanos y alrededor de las cuales irían tomando forma los grandes proyectos nacionales.

El Estado no se limita a ser un instrumento adaptado, funcional y pasivo que tiene como misión asegurar la dominación de las oligarquías. Está claro que el sistema político haitiano, tal como ha funcionado siempre, con sus leyes, sus códigos judiciales (el Código Rural, el Código Civil, el Código de Comercio), con sus instituciones (el Parlamento, el Poder Ejecutivo, los Tribunales, las Fuerzas Armadas, etc.) reflejan por lo general esta dominación. Pero, el funcionamiento del sistema tradicional puede ser perturbado debido a la intromisión de varios factores, por una serie de fuerzas nuevas y por su complejidad relacional. Puede resultar de ello una nueva situación política cuyo desarrollo autónomo relativo, parcial, localizado, experimenta, en ciertas circunstancias excepcionales, una fuerte aceleración, capaz de trastornar las relaciones de fuerza dentro de la sociedad. Así sucedió con el impacto nacional del movimiento democrático y popular de los años 80, fuertemente permeado por el dinamismo de las organizaciones cívicas, y más tarde, en los años 90, con el éxito político de *Lavalas* hasta la ratificación del liderazgo de Aristide por un sector importante de la clase dirigente norteamericana, y de manera más general con la integración de todo el movimiento democrático como fuerza de estabilización y de regulación del movimiento social haitiano en la estrategia de las potencias tutelares.

Si no analizamos cuidadosamente las mutaciones sociales y políticas de los últimos dos decenios, no podremos entender qué dirección está tomando el país. Una mala lectura de la coyuntura de 1990 hizo caer en lo irrisorio a todos los competidores electorales del líder carismático. Ya en 1986 y 1987, los partidos políticos que participaron en la lucha contra la dictadura (S. Claude,



G. Eugène, Deronceray, ...) fueron aplastados por las nuevas fuerzas, por no haber comprendido lo que estaba surgiendo y se estaba imponiendo al mismo tiempo a la sociedad haitiana y a las potencias tutelares: la emergencia de las masas populares y su integración efectiva a las relaciones de poder. Lo cual, aunado al descrédito dramático en el que habían caído los militares, no dejaba la más mínima oportunidad a la clase política tradicional. Desde 1987, se vio claramente que únicamente un mandato popular indiscutible podía legitimizar el acceso al poder y constituir el factor primordial de la estabilidad política y de la normalización institucional.

Sin embargo podemos notar que hasta ahora el pueblo haitiano participa en la política solamente en momentos excepcionales y no logra todavía proyectar su calidad de protagonista en formas de representación permanente y organizada. Sus intervenciones colectivas son "revoluciones", al igual que sus desplazamientos masivos hacia las urnas con motivo del referendo constitucional de marzo de 1987, durante las primeras elecciones generales después de la dictadura en noviembre de 1987, saboteadas por cierto por la intervención sangrienta de las fuerzas militares y «*macoutes*» y finalmente en las elecciones de 1990, caracterizadas por su simbolismo anti-*macoute* y el fervor por el hombre providencial. El pueblo haitiano da la impresión de estar políticamente presente únicamente en períodos de gran crisis. Entre dos crisis, se produce el reflujo. Debe interpretarse correctamente esta ausencia. Este espacio debe ser llenado. Los demócratas y su organización sólo podrán contribuir verdaderamente a ello estimulando debates de fondo, multiplicando las iniciativas de desarrollo del pensamiento y de la acción democrática, combatiendo en pro de la institucionalización sistemática de la democracia: renovación periódica de los dirigentes, funcionamiento correcto de las instituciones del Estado y de las administraciones municipales, vida de los partidos, consolidación y extensión de la red asociativa.

### ***c. Estimular los debates, promover la ciudadanía***

En ningún caso, la vida política puede ser interpretada exclusivamente como una confrontación entre individuos que aspiran al poder. Las ambiciones individuales constituyen uno de los factores que contribuyen a definir el juego político en todas sus di-

menciones sociales, humanas e institucionales. Pueden tener un efecto desestabilizador o, por lo contrario, coadyuvar, a modo de elementos de motivación, al dinamismo de la acción democrática. El espacio público está atravesado por muchas iniciativas, discursos que se entrecruzan, se entrechocan y con frecuencia se pierden en la algarabía. Por lo tanto, es necesario intentar siempre aclarar qué es lo que está en juego, no perder nunca de vista los objetivos y los valores fundamentales en los que está basado el proyecto democrático... De ahí, la necesidad de aceptar hacer un esfuerzo sostenido de teorización tendiente a revitalizar la función crítica y el pensamiento teórico. Los grandes debates de ideas, la efervescencia intelectual, la confrontación libre y civilizada de los puntos de vista constituyen condiciones esenciales para el reforzamiento de la sociedad civil y el pleno desarrollo de la democracia. No se recalcará nunca lo suficiente la importancia de una crítica vigilante, pertinaz, y claro está, responsable, para la preservación y el desarrollo del movimiento democrático. Sin esta preocupación, los viejos reflejos autoritarios y dogmáticos que vuelven al galope acabarían llevándose rápidamente las conquistas. Entre este enfoque crítico y el movimiento social, la relación debe ser dinámica, es decir imaginativa, rigurosa, pero no ideológica.

El acceso a la condición de ciudadano es el mismo meollo de la esperanza democrática. Los individuos se convierten plenamente en ciudadanos no sólo cuando pueden elegir libremente a sus dirigentes sino cuando sienten que todo lo que se está realizando para mejorar sus condiciones de vida les concierne, cuando se reconocen en el desarrollo de cada proyecto colectivo que integra todos los componentes nacionales, cuando están convencidos de la honradez, del sentido de justicia, de la capacidad de comunicación y de intercambios de los funcionarios públicos, cuando es evidente para ellos que sus derechos fundamentales están garantizados, que las leyes se aplican dentro de un sistema judicial eficaz, libre de todo obstáculo.

## **6. El proyecto democrático y sus requisitos**

La democracia tiene requisitos casi tiránicos: requisitos de lucidez y de ética, de paciencia y de pedagogía, pero también de transparencia y de sinceridad, de tolerancia y de respeto. No es

demócrata quien tiene ideas fijas, quien ve enemigos en todas partes, quien se refugia en la comodidad de las verdades perennes. Tampoco es demócrata quien no tiene ideas, quien cambia de ideas en cada vuelta de esquina, quien no tiene convicciones ni puerto de matrícula.

¿Cómo instaurar la democracia en Haití sin pasar por la revolución y cómo realizar la revolución sin sacrificar la democracia? ¿Cómo instaurar la democracia, forzar el advenimiento de la justicia sin atacarse al orden tradicional, a toda su maquinaria institucional e ideológica, sin zarandear el país de arriba a abajo y crear así una nueva dinámica, un nuevo orden con su propia lógica que implica nuevos dispositivos de lucha y el alto riesgo de pisotear algunos derechos fundamentales, de provocar nuevas injusticias para vencer las resistencias? Este es el dilema.

### ***a. El mínimo irreducible***

Antes que nada, cualquier proyecto colectivo de desarrollo social y de auto-realización de los individuos - y la democracia es uno de ellos - implica el reconocimiento del estatuto inalienable del ser humano al cual están asociados algunos derechos fundamentales imprescriptibles (derechos a la vida, a la integridad física y moral de la persona, derecho de expresión, etc.). En estos derechos considerados como valores comunes a toda la humanidad, es decir que faltando ellos ningún hombre es un hombre, es que fundamentamos lo que llamamos el mínimo democrático irreducible. Ninguna pretensión a un particularismo cultural, tradicional o nacional, cualquiera que sea, puede prevalecer contra ellos. Constituyen, en nuestra opinión, el menor común denominador de cualquier democracia. De ahí en adelante, se puede considerar una multiplicidad de modelos y de acciones que dan forma y sentido al proyecto democrático resultante de una historia particular. Ahí es donde puede residir la originalidad de la democracia haitiana, de la democracia dominicana, de la democracia cubana ... siempre y cuando los demócratas de esos países no se limiten a proclamarla verbalmente sino que se dediquen a la tarea de hacerla vivir concretamente en todos los ámbitos de la vida.

Sabemos que la democracia no es solamente instituciones, de lo contrario estaría floreciendo en nuestro planeta desde hace mucho tiempo. Debe ser cultivada cuidadosamente para formar bloque con nuestro paisaje. Es un fenómeno cultural. Mientras el respeto a la vida humana, el respeto del derecho a la libre expresión no estén incorporados a nuestras prácticas sociales y políticas como un reflejo, les va a tocar trabajar duro a los demócratas no solamente con y frente a los poderes públicos, sino también con y frente a la población.

Si tomamos en cuenta las condiciones concretas del momento (coyuntura internacional, despertar popular, relaciones de fuerzas internas, recursos nacionales, etc.), podemos, en contra de una idea difundida, sostener el punto de vista que la democracia no es un lujo para nuestras sociedades dependientes y miserables. Después de todo, la nación haitiana no adelantó un ápice bajo las dictaduras sucesivas. Aquí y allá, se repite que la democracia es ante todo asunto de desarrollo económico, basándose en un racionamiento analógico que hace referencia a la experiencia histórica europea, pero también suputando que el bajo nivel de preparación de una población miserable no la capacita para resolver los problemas complejos que plantea semejante régimen. Está claro que vamos a necesitar más tiempo, acciones cívicas y pedagógicas a montones, imaginación creativa, mucho trabajo y mucha paciencia para materializar semejante proyecto. Porque se trata de lograr integrar dentro de un proceso tan complejo como lo es la democracia modernizadora porciones enteras de una población preocupada ante todo por su supervivencia y sumergida desde hace muchísimo tiempo en la cultura del «buscárselas». Sin embargo, no tenemos otra opción a no ser que abduquemos nuestra autonomía de ser colectivo y nuestra dignidad de ciudadano. Debemos hacer nuestro el proyecto democrático para echar a andar hacia otro recorrido histórico, en ruptura con nuestra herencia, para trazar el punto de partida hacia el desarrollo económico, el progreso social y la justicia.

El desarrollo de la democracia tiene como efecto restablecer la confianza en las instituciones nacionales, suavizar las tensiones sociales, brindar la oportunidad de multiplicar las instancias de arbitraje, favorecer la instauración de un ambiente de paz, de se-

guridad, gracias a un mínimo de consenso social, crear una corriente de esperanza y de optimismo, otros tantos factores favorables a la multiplicación de proyectos de desarrollo que emanen tanto del país profundo como de la «diáspora».

***b. Democracia participativa, democracia representativa: un falso pleito***

En la democracia, la institución es un espacio sagrado. Es a través de ella que se efectúa la representación. Esto es verdad no sólo para las instituciones del Estado (Parlamento, Gobierno, Tribunales, etc.) sino también para los organismos de agrupamiento profesional o ciudadano (sindicatos, asociaciones campesinas, patronales, asociaciones diversas). En la democracia, la naturaleza y el modo de funcionamiento de la institución están definidos por las leyes. Las agrupaciones, las organizaciones colectivas están sujetas a leyes, por la sencilla razón de que la ley es la que protege al individuo. Si bien el derecho de asociación es sagrado, las modalidades de funcionamiento de los colectivos están sujetas a leyes. No es la libertad total la que protege al individuo expuesto a todas las potencias y a todas las maniobras, sino la ley, garante de los derechos y de los recursos. Si las agrupaciones y las asociaciones constituyen espacios de solidaridad, también pueden servir los designios de los poderosos e intereses inconfesados. Porque en el seno de los colectivos y de las instituciones se entablan relaciones de fuerza cuyo desarrollo puede desviar a las organizaciones de su curso.

Cuando se contraponen la democracia participativa y la democracia representativa, poniendo a dudar de la autenticidad de ésta, se plantea un falso problema. Efectivamente, toda democracia representativa es también participativa, ya que saca su legitimidad del voto popular y de la legislación que rige las instituciones en las que se desarrolla. El ejercicio del derecho al voto supone un derecho a evaluar la conducta de los funcionarios electos y a sancionar sus acciones. Las condiciones democráticas y eficaces de dicho derecho requieren formas de acción colectiva, a través de los partidos, de las asociaciones cívicas, profesionales u otras. Con todo y esto, el ciudadano es quien ejerce periódicamente su dere-

cho al voto en condiciones establecidas por la Constitución y por las leyes para elegir al Jefe del Estado, al Síndico, a los concejales de las secciones municipales, a los parlamentarios y, por lo tanto, contribuir así a la formación del Gobierno, del Parlamento y de los municipios. Si bien el poder está ejercido efectivamente por representantes electos, no está prohibido que se desarrolle, al margen de éstos, un debate libre sobre la administración de la cosa pública. Además de ser protagonista en la formación de las instituciones estatales, el ciudadano goza del derecho de petición ante las instancias parlamentarias y del privilegio de manifestación pública de su opinión, en acuerdo o en desacuerdo con las iniciativas de los poderes públicos. Se trata de un medio de presión y de intervención extra-institucional reconocido a los ciudadanos.

Todas estas disposiciones no eliminan sin embargo el riesgo de alienación y de desviación de la misión del poder constituido. Otros muchos factores que resultan de las relaciones sociales, de las relaciones de fuerza, de las condiciones generales de la vida nacional y de las determinaciones culturales entran en cuenta. Está claro que la democratización no depende exclusivamente del libre juego de las instituciones ni de la aplicación de las leyes. Es también vigilancia y organización ciudadana, acción pedagógica duradera e intervención en cualquier momento en todo lo que concierne la vida pública bajo la forma de debates o de protestas individuales y colectivas, en el respeto de las leyes. Todo el problema consiste en organizar a los ciudadanos de manera apropiada.

En la mente de algunos, democracia participativa significa democracia directa. Consiste en apelar directamente al pueblo más allá de las instituciones y a despecho de las leyes. Esta supuesta democracia es la de la calle, de las emociones populares. Los tribunos populares, los demagogos, los mesías hacen de ella la palanca de su poder. Por cierto, es para precaverse de este peligro que en nuestra historia las constituciones post-dictatoriales prohíben los referendos. Los dictadores se habían valido fraudulentamente de este procedimiento para eludir las leyes y dar una legitimidad popular aparente a sus decisiones arbitrarias. A menos que se trate de una insurrección popular, lo cual constitui-

ría un planteamiento diferente, es decir un movimiento para volver a fundar un nuevo régimen social y político. Pero, siempre que se trate de un régimen democrático cuyos contornos institucionales y legales estén ya bien definidos, los únicos instrumentos a los que se puede recurrir son los previstos por las leyes. "Es imposible hoy en día hablar de democracia directa, de poder popular e incluso de auto-administración sin ver surgir inmediatamente de estas palabras fantasmales la figura muy real del partido totalitario, de sus militantes autoritarios, la mediocridad arrogante de sus jefecitos, la pesadez agobiadora de los llamamientos a la unidad del pueblo y de la nación."<sup>5</sup> Un discurso puede presentarse bajo la especie y la apariencia de la claridad, del rigor o incluso de una reflexión crítica y ser apenas expresión y molde de una emoción, que toma prestado el lenguaje de la rigidez militante.

## CONCLUSION

Todavía nos queda por hacer el balance de la crisis y de la lucha por la democracia. Además de los obstáculos y de las dificultades evocados aquí y en otras partes, debemos darnos cuenta, sin embargo, que la historia se aceleró algunas veces independientemente de la voluntad de los actores. Hay conquistas que es bueno destacar para no tener la tendencia, como sucede con demasiada frecuencia, de mirar solamente los resultados negativos.

La movilización y el despertar popular están omnipresentes en la coyuntura a pesar de un déficit en materia de organización, de ciertas desilusiones y cansancios. Hablar alto y claro parece estar bien arraigado en el paisaje político, incluso con las carencias y las debilidades mencionadas en los círculos informativos. El orden político tradicional está embestido por todos lados, a pesar de que le cuesta trabajo, al nuevo, echar raíces. Las bases de apoyo del poder tradicional están siendo socavadas aunque las potencias tutelares, y en particular los Estados Unidos, siguen teniendo mucho peso en la conducción de la política nacional. Por más lejos que podamos ver, parece ser un hecho que, de ahora en adelante, para acceder a las funciones dirigentes, en condiciones

5 Alain Touraine: *Critique de la modernité*, Paris, Fayard, 1992, p. 380.

de vida política tranquila, se debe pasar por unas elecciones, convertidas auténticamente en la principal vía de acceso al poder. Esto ya estaba inscrito tan profundamente en las luchas recientes de poder que la batalla fue encarnizada - y sigue siéndolo - alrededor de la institución encargada de la organización de todas las operaciones electorales, el CEP. El desencadenamiento de las pasiones ha demostrado hasta qué punto las fuerzas enfrentadas, tradicionales y nuevas, se empeñan en controlar las vías de acceso al poder. Finalmente el ejército duvalierista ha sido derrotado y derrotado a carta cabal, ciertamente por la confrontación con las fuerzas extranjeras de intervención, pero también por su terquedad criminal al negarse a tomar nota de los cambios profundos ocurridos en la política de las potencias dominantes, de los nuevos métodos introducidos en las relaciones internacionales contemporáneas y de los cambios profundos post-duvalieristas ocurridos en el país. Pero todo esto se logró a un alto costo. Con la desaparición del ejército, el Estado nacional perdió su autonomía relativa. Pero este ejército funcionaba tan anárquicamente y estaba en un estado de desmejoramiento tal que no podía constituir en ninguna circunstancia (lavalasiana o no) una carta de triunfo para el poder civil en sus relaciones con la principal potencia tutelar.

El país había vivido tal desestabilización y las fuerzas de regulación tradicional tal degeneración que el movimiento democrático, a pesar de sus fallas y de su falta de preparación, era el único capaz de desempeñar el papel de fuerza estabilizadora. Las potencias tutelares lo comprendieron y lo tuvieron en cuenta. Sin embargo, no debemos olvidar, para citar las palabras de Auguste Comte que "solo se destruye lo que se sustituye". La dependencia es omnipresente en nuestra vida cotidiana y va a ser muy larga. Se inscribe en nuestras políticas, en nuestras relaciones internacionales, en nuestras costumbres, en nuestra mentalidad.

El país está agobiado por los infortunios. La gente necesita respirar, necesita dejar de destrozarse los unos a los otros para construir. Y la construcción de la democracia en Haití, en las condiciones actuales, es una tarea ardua que debe inspirarse en un gran proyecto que postule un verdadero conglomerado patriótico, lo cual no impide tomar en consideración los múltiples inte-



reses económicos y sociales, políticos y culturales de un país desorientado, devastado por una larga crisis. Ningún poder, por inmenso que sea, puede dejar de lado los datos objetivos de la vida nacional y del entorno internacional y tampoco puede negar las contradicciones sociales y los intereses económicos y políticos que condicionan la vida política. Lo cual no excluye el requisito de lucidez frente al comportamiento de los actores y a las relaciones de fuerza. He dicho lucidez, y no desconfianza enfermiza, compartida con demasiada frecuencia por muchos militantes, organizadores y dirigentes políticos que no han sido tocados todavía por la gracia de la tolerancia y de la libre discusión.

La envergadura y la duración de la crisis haitiana, la debilidad de las organizaciones, la falta de preparación de los dirigentes, los enfrentamientos destructores, el avance de la desconfianza frente a las políticas, las prácticas de desprestigio y antropofagia política modifican las voluntades y entibian los compromisos. Y sin embargo, nunca hasta ahora, habíamos tenido tanta necesidad de individuos con amplias perspectivas y elevados puntos de vista, sobre todo en los diferentes segmentos del movimiento democrático, entre los que apelan al cambio, que se presentan como los defensores del progreso y los combatientes de la democracia.

Libres, bien informados, comprometidos, les toca a ellos, más que a nadie, promover un amplio debate sobre la importancia crucial del saneamiento de las relaciones y de la cooperación entre los dos pueblos que comparten la isla, sobre los desafíos de la democratización persistente de nuestras dos sociedades, y más allá de ellas, de todas las del Caribe.